

A veinticinco años: ¿dónde estamos?

SERGIO ZERMEÑO

I

Han pasado 25 años; los que vivimos el movimiento estudiantil y quedamos ligados al análisis social y a la crítica estamos obligados a hacer un balance: ¿tiene algo que ver lo que somos, nosotros y el país, con lo que queríamos ser?

Creo que la siguiente idea puede guiarnos a buscar una respuesta que conecte aquel tiempo y nuestro tiempo: los años que estuvieron alrededor del 68, los sesentas y los setentas, nos presentaron un panorama sociopolítico en el que los actores de nuestra modernidad vivieron su mayor embarcamiento, o digamos, su menor debilidad.

En efecto, situándonos al margen de la moda posmoderna, nos parece pertinente afirmar que en esos dos decenios México vio surgir los movimientos obreros de mayor autonomía, las protestas con más consistencia venidas de las clases medias (el 68 en su centro) y las mayores afrentas al vértice estatal desde los fortalecidos grupos burgueses nacionales y regionales.

Sin pretender hablar de causalidad, ni de “agudización de contradicciones”, lo cierto es que el movimiento ferrocarrilero de fines de los cincuentas, con sus presos políticos (Vallejo) reivindicados por el 68, expresa la misma necesidad de autonomía que la tendencia democrática de los electricistas con Rafael Galván y que el vigoroso sindicalismo independiente de los setentas; de la misma manera el movimiento del magisterio con Otón Salazar reivindicaría la autonomía organizativa y política que caracterizarían al movimiento médico del 65, a los movimientos estudiantiles a lo largo de aquel decenio y al sindicalismo universitario de trabajadores y

académicos que fuera la nota preponderante de los setentas; qué decir, en fin, de la toma de distancia antiestatal y la casi confrontación que el empresariado y la derecha escenificaron durante el echeverrismo y que hicieron posible aquellos encabezados como: “Los empresarios frente al Estado” o incluso “Los empresarios en el Estado”.

Es cierto que en muchas ocasiones el discurso político-ideológico de estos movimientos ocultaba su manifestación más importante: el embarcamiento de los actores colectivos *sociales*, la mayor densidad societal digamos, en un país cultural e históricamente estatal. En el 68 coexisten tensionadas dos orientaciones: la culturalista basista, alimentada por el mayo francés, la revuelta generacional, la liberación sexual y el antiburocratismo y antiautoritarismo de los movimientos juveniles de los países desarrollados, a través de la música y el cine, por un lado y, por otro, su manifestación más vertical, propiamente política, preocupada por la organización, las representaciones legítimas, las alianzas estratégicas con campesinos y obreros, la conformación del CNH y sus comisiones en multiplicación, el politburó ante la emergencia de la represión y, en fin, todo aquello que “politizaba” al movimiento y que por momentos lo hacía aparecer tan piramidal como su adversario (a ello cooperaba, sin duda, nuestra cultura estatal y el marxismo-leninismo que constituía, sobre todo en aquel momento, la corriente hegemónica en las carreras sociales y humanísticas universitarias).

Pues bien, lo que aquí afirmamos es que el fortalecimiento social que se vivió en aquellos dos decenios, nuestro mejor acercamiento a la modernidad, digamos, y del que el movimiento estudiantil fue la manifestación mejor lograda, sería totalmente modificado a lo largo de los años ochentas y noventas. Nuestra modernización salvaje, podría afirmarse, está acabando con nuestra endeble modernidad. Esta es la forma en que hoy, a veinticinco años, debe ser interpretado, nos parece, aquel evento social. Antes de demostrar lo dicho en torno al México de hoy, veamos cómo el 68 se desparamó sobre la sociedad mexicana fortaleciendo su independencia frente al Estado, aunque ya sin cabeza ni unidad.

II

Si dejamos de lado a la guerrilla por haber sido cortada de tajo en los últimos años del echeverrismo, como nos lo han recordado Montemayor y Aguilar Camín, dos fueron las derivaciones del movimiento estudiantil:

1. La mejor conocida y la que tuvo mayor visibilidad fue naturalmente la sindicalista. Desde el inicio de la campaña presidencial, Luis Echeverría entró en fricciones con el secretario general de la CTM, Fidel Velázquez, y ello abrió un espacio muy valioso para los sindicatos en busca de independencia frente a la pesada pirámide corporativa del cetemismo. Arrancaron seis años de fomento a la insurgencia sindical con énfasis en los lastimados centros de educación superior con la UNAM, al frente: los trabajadores administrativos en el STEUNAM y los académicos en el SPAUNAM y, en lo que hace a provincia, destacaron las universidades de Guerrero, Puebla, Zacatecas, Oaxaca y Sinaloa. Viene al caso recordar que la “forma” sindicalista de hacer política fue una modalidad impuesta desde lo alto, más que una elección de las dirigencias político-académicas surgidas del 68. En efecto, en el año 71 los presos políticos al ser liberados manifestaron su interés por crear organizaciones y partidos políticos. Ahí comenzó Heberto Castillo las primeras versiones del PMT y se fundó la organización revolucionaria Punto Crítico. Sin embargo, por las razones descritas, y porque el monopolio de las representaciones no permitía en aquel entonces otorgar legitimidad ni siquiera al Partido Comunista Mexicano, los espacios que *a fortiori* tenían que abrirse a la participación de aquellos convulsionados actores sociales quedaron restringidos a los terrenos más básicos, más societales del sindicalismo.

2. Pero esta efervescencia de la acción en lo social fue más auténtica en el segundo caudal en que desbordó la olla hirviente del 68: “ir al pueblo”, salir de las universidades para irse a vivir entre los pobres, oírlos, organizarse en torno a sus necesidades, construir el partido desde ahí abrazando la “línea de masas” en la forma mostrada por el maóismo. Aunque al principio unos plantearon ir a las zonas obreras y otros sobre todo al campo (“cercar a las ciudades”), fue sin embargo en las áreas urbanas, en las colonias populares de reciente asentamiento y en las invasiones de terrenos para vivienda,

en donde encontraron una mejor respuesta¹. Desde el año 1969 la sección Ho Chi Minh en el medio obrero de la Ciudad de México, la Organización Regional Compañero y Política Popular decidieron posponer la formación partidista en favor de las organizaciones de masas en provincia. Fueron fundados entonces el Comité de Defensa Popular de Durango (CDP), la Unión Ejidal Valle de Banderas en Nayarit, el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey con más de 20 colonias, el Frente Popular de Zacatecas, la Colonia Francisco Villa en la ciudad de Chihuahua —desde entonces se organizó con electricistas y ferrocarrileros la defensa popular (CDP) en ese estado—, la Unión de Uniones en los recientes asentamientos campesinos de Chiapas, la Coalición de Ejidos en el Valle del Yaqui, en Sinaloa y Sonora, expropiados al final del sexenio echeverrista, los ejidos de La Laguna y la zona industrial de Monclova en Coahuila, San Miguel Teotongo y la Unión de Colonias Populares en el Valle de México y una gran cantidad de asentamientos urbano-populares menos conocidos en Tepic, Veracruz, Sinaloa, Tijuana, Querétaro, Cuernavaca y León. Se trató de una efervescencia de lo social, de ir a las bases, lo que no estuvo exento de una sobre-ideologización y sobre-politización: había las corrientes más “puras” que no despegaben su enfoque de los actores “protagónicos” de la historia y de la esfera de la producción (el cerco a la ciudad desde el campo, o cuando eso resultó una utopía, el control obrero del corazón productivo bajo las directrices organizadas y centralizadas en una élite). A pesar de ello no predominó la Línea Proletaria (LP) sino la Línea de Masas (LM): una mayor descentralización con respecto a la estructura proletaria, la insistencia en que los movimientos basados en las colonias eran el corazón mismo de la “actividad revolucionaria” y no un complemento de ninguna esfera productiva. No olvidemos que la primera gran invasión para asentar colonias populares fue recién durante el movimiento del 68 y al margen de él, en los

¹ A este respecto consúltese Óscar Núñez, 1990, *Innovaciones democrático-culturales del movimiento urbano-popular*, UAM. Vivienne Bennett, 1993, “Orígenes del movimiento urbano-popular mexicano: pensamiento político y organizaciones políticas clandestinas (1960-1980)”, *Revista Mexicana de sociología*, núm. 3, IIS-UNAM. Josaine Boucher, 1990, “La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), una historia de odios y amores, encuentros y desencuentros entre organizaciones políticas”, *Movimientos sociales, democracia emergente y sistema político en México*, S.Z. y Aurelio Cuevas ed., Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM.

pedregales aledaños a la UNAM). Así, la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, a diferencia de OIR-LP, al dar primacía a las organizaciones populares y a lo local por sobre la actividad partidista, se mantuvo más cerca de su perfil maoísta original y encontró sus alianzas naturales en el movimiento urbano popular destacando su articulación con la Unión de Colonias Populares (UCP) de la capital y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Hacia el fin de los setentas, sin embargo, con el auge electoral partidista generado por la Reforma Política de Reyes Heróles desde el 77, se planteó inevitablemente la necesidad de desplazarse desde los movimientos locales hacia la organización de un frente que pudiera articularse, con el tiempo, en la “forma” partido (no necesariamente electoral). La Coordinadora Nacional de Movimientos Urbano Populares (CONAMUP) aparece en el centro de una nueva época en la que proliferan los Frentes, las Coaliciones, las Alianzas, las Coordinadoras... Una especie de nueva oleada hacia el centro y hacia arriba que va a verse reforzada por el terremoto del 85 en la capital y por el ascenso del fenómeno cardenista y su poderoso magnetismo hacia la acción político-partidaria. La CONAMUP se disloca y prácticamente desaparece en la espiral centralizadora del 85 y el 88 y el gran movimiento maoísta de los setentas hacia “lo social”, se repliega en lo que fueron sus bastiones más importantes del norte del país. Al organizar el Partido del Trabajo (PT) y gerenciar los importantes fondos que Salinas —vía PRONASOL— les otorga bajo el acuerdo de mantenerse deslindados del cardenismo, estos grupos intentarán defenderse, en alianza táctica, de lo que será característico de los últimos 20 años de nuestro siglo: el desmantelamiento de lo social, el vaciamiento hacia arriba y hacia abajo de los espacios organizativos e identitarios intermedios entre el individuo atomizado, sin identidad, y el liderazgo presidencial paternalista.

III

Tenemos pues una primera fuga hacia lo alto, producto natural de la Reforma Política y del lópez-portillismo que consideran que la “forma sindicato” de hacer política y la mezcla entre los universitarios y el pueblo genera una alteridad inconveniente mientras la

“forma partido” (partidista-parlamentaria), sería mucho más acorde, mucho más moderna y, fundamentalmente, fomentaría una oposición más moderada al tensionar y confrontar acción social y acción política, movimiento social y protagonismo parlamentario, base y dirigencia. En la propia UNAM la historia de los setentas es nítida a este respecto, lleva el nombre de soberonato y recuerda en algo el enfriamiento de las sociedades sudamericanas desde las dictaduras: dismantelar la sobreparticipación dividiendo, primero, el sindicalismo académico del sindicalismo de los trabajadores administrativos (STEUNAM-AAPAUNAM); después, absorbiendo hacia la vida partidista nacional (PC, MAP, PMS, PRT) a una de las más lúcidas camadas de políticos intelectuales, hijos del 68 y agrupados en el Consejo Sindical ya en 1973; separando, en fin, el sindicalismo de la UNAM del de las otras universidades al poner en la ilegalidad al SUNTU como órgano centralizador. Todo el operativo se aceleró en los primeros dos años del López-portillismo: el sindicato del personal académico (SPAUNAM) perdió un recuento y la titularidad del contrato colectivo pasó a las Asociaciones Autónomas del Personal Académico (AAPAUNAM) promovidas por la rectoría acelerándose la desbandada de los políticos-académicos hacia la política nacional; por su parte, la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP se abocó a la delicada tarea de condicionar el presupuesto en cada una de las universidades del país a la clara separación entre la vida académica universitaria y el entorno social popular.

Fuera de los espacios universitarios y durante todo el sexenio será muy fuerte la tensión entre participar en la política partidista legal o permanecer en la base de los movimientos, en el nivel más sólido de la identidad restringida o basista. Incluso en los movimientos más consistentes, como el de la COCEI en Juchitán, se romperá, aunque no definitivamente, la alianza con el PSUM hacia 1983, en un afán ya descarado del régimen lamadridista por separar sanitariamente la democracia política de la democracia social.

En estas condiciones, el sexenio de López Portillo y en parte el que le sigue, se caracterizarán por un reagrupamiento defensivo de los movimientos y de las luchas sociales: son los años en que van a proliferar las coordinadoras (CONAMUP, CNTE, CNPA, COSINA...); los movimientos nacionales y regionales (MRP, MAUS, Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur del D.F.), las centrales (CIOAC); las aso-

ciaciones (ACG, ACNR...); las uniones (UPREZ, ULR, UCEZ, UIC...); los frentes (FNAP, FNCR, FNDSCAC...), etc.

IV

Pero el debilitamiento de las identidades colectivas y de las intermediaciones no responde sólo a un acto desde arriba, desde el autoritarismo estatal: a partir de entonces, el dismantelamiento de las identidades sociales será resentido sobretodo “desde lo bajo”: por la masificación demográfica que hacia el final de los setentas modificará de manera rotunda el panorama urbano y se enlazará dramáticamente con el total estancamiento económico de los años ochentas, la debacle petrolera y el fin de los recursos públicos y de los “préstamos dulces”.

Como lo hemos establecido en otra parte, quedó poco de esa sociedad y de esos actores que durante los sesentas y los setentas podríamos calificar de relativamente embarneados, de manera que quienes tuvieron que actuar y hacer política en el nuevo panorama se encontraron con un entorno bastante desordenado, en vías de informalización y pauperización (durante los ochentas la caída del mínimo salarial fue del 40% y el crecimiento de la economía informal alcanzó a la mitad de la mano de obra). Esto significó, en un país cuyo PNB había crecido al 6% en los últimos 30 años, una conmoción. Como lo han establecido algunos economistas latinoamericanos: América Latina creció, en el momento de su “despegue” (1950-1980), a una tasa del 5.5% mientras que los Estados Unidos (1870-1906), lo hizo al 4.8%². Pero a diferencia del resto de la región, México no sólo no moderó la tendencia durante los setentas, sino que atizó la caldera del crecimiento en su flamante rol de país petrolero. Para una sociedad que prácticamente había cambiado a su población del campo a la ciudad en cuatro décadas, el impacto de todo este impulso contra el muro del estancamiento que significaron los años ochentas fue catastrófico. No nos parece exagerado ilustrar la “pedacería social” resultante con los datos de José Luis Calva

² Víctor Tokman, 1987, “El imperativo de actuar. El sector informal hoy”, *Nueva Sociedad*, núm. 90, Caracas 1987.

cuando nos recuerda que la creación de empleos en el país fue de sólo 1.3 millones entre 1982 y 1990, contra 1.2 millones de jóvenes que se incorporaron cada año como demandantes de trabajo, lo que hasta el momento había creado una reserva de 8 millones de personas que no fueron absorbidas por el mercado de trabajo, estimándose que un porcentaje cercano a la mitad estaría en los Estados Unidos en forma ilegal³.

Sin embargo, este gran desorden no es producto solamente del descontrol demográfico, del pasaje abrupto de lo tradicional campesino a lo moderno urbano y de la industrialización excluyente, de la crisis de estancamiento y de la marginación. Se explica también y cada vez más por nuestro proceso de integración transnacional, la caída abrupta de los aranceles y la norteamericanización de México a partir de la entrada al GATT en 1986. Lo que fue difícil construcción de una burguesía nacional en expansión durante la etapa sustitutiva de importaciones y de crecimiento hacia adentro, se convirtió en lo contrario: concentración en menos de 200 firmas transnacionales con una modernización vuelta hacia afuera: ser competitivo en el plano mundial en menos de un sexenio o morir (destrucción en consecuencia de lo que alguna vez se llamaron clases sociales nacionales). Pero olvidemos los grandes nombres de la etapa sustitutiva, lo que resulta más dramático en este enfoque es la destrucción del empresariado intermedio; 70 mil medianas y pequeñas empresas desaparecidas en menos de ocho años, una de cada dos que existían, sabiéndose incompetentes más de la mitad de las restantes. De la consistencia del otro actor fundamental de la industria poco se puede decir: reducción cuantitativa de los obreros del centro del país, desaparición *de facto* y sin protestas del derecho de huelga, migración de la gran industria al norte incorporando a un proletariado más joven, menos escolarizado y sin tradición obrera ni organizativa y, en la maquila, crecimiento espectacular de 100 mil a un millón de obreros entre 1980 y el año 2000, cuando representarán el 33% de la población manufacturera (mujeres en un 75%, en su gran mayoría entre 15 y 25 años de edad, con bajísimos índices de sindicalización, nulos derechos laborales, salarios cercanos al mínimo y gran inestabilidad en el empleo). Recordemos en fin que en-

³ José Luis Calva, *La Jornada*, 16 de nov., 1991.

tre cinco y 15 millones de campesinos podrían ser afectados en el próximo decenio dependiendo del fin de los subsidios y la entrada de granos básicos a precios muy reducidos (maíz y frijol fundamentalmente). Agroindustrialización y desaparición del ejido en el Norte y, en el Sur, migración, autoconsumo defensivo y atraso en ejidos y comunidades sin ningún atractivo para el capital, comienzan a ser las características de la nueva etapa en el agro.

V

A lo anterior se agrega un fenómeno desarticulador muy característico de nuestro país pero sobredimensionado en el presente. En efecto, desde el momento en que los regímenes de la llamada “transición a la democracia” aceptan abiertamente que la reconversión, la globalización y el libre comercio exigen políticas de ajuste que implican la exclusión y pauperización de enormes masas durante una etapa que “puede ser larga”, aceptan al mismo tiempo que atravesarán por periodos de inestabilidad peligrosos para el modelo en su conjunto (Brasil, Venezuela...). En tales condiciones y con la certeza de que relanzar el crecimiento es el “fin” buscado a toda costa, se justifica el *actuar preventivamente desalentado, o francamente desmantelado, la constitución de identidades sociopolíticas alternativas* y de espacios públicos de interacción comunicativa que puedan volverse inmanejables o exigir del Estado compensaciones y subsidios que malogren la agilidad que el reordenamiento requiere. Ello ha empujado a redoblar lo que ha sido un rasgo histórico del autoritarismo mexicano: la destrucción de todo aquello que cobre alguna fuerza independiente del control desde el vértice estatal.

Pero en la medida en que la democracia se vuelve una exigencia de los organismos mundiales en la era de la globalización, el desmantelamiento desde lo alto se ha convertido en una finísima especialidad de destrucción de espacios e identidades colectivas sin el empleo manifiesto de la violencia, una habilidad para desmantelar la democracia social manteniendo una democracia política cada vez más encerrada en espacios restringidos, cupulares, cernidos por el fraude electoral: un juego partidista y parlamentario hiperpublicitado por los medios de comunicación, cuando así conviene, para recrear

la imagen de que alguien vigila los intereses ciudadanos allá arriba.

Algunos ejemplos de esta ingeniería del desmantelamiento social serían:

1. *La ruptura del PAN*, debido a los costosísimos compromisos de fidelidad que el Estado le impuso como condición para reconocerle sus triunfos electorales. Se tuvo que mostrar tan cerca del salinismo la dirigencia panista y renunciar tan escandalosamente a una reforma del sistema electoral, que se ha debilitado uno de los raros organismos sociales de la vida política mexicana (imperó lo más negativo de lo mexicano: la entrega en sacrificio del poder social a cambio del poder para la dirigencia, así amansada y sometida al tlatoani).

2) *La ingeniería electoral* para el fraude: montos económicos elevadísimos que no se comparan con los modestos presupuestos electorales de las democracias de Occidente; tienen como objetivo, a) asegurar una mayoría parlamentaria a la élite gobernante permitiendo leyes expeditas y *ad hoc*, comenzando con la propia legislación electoral (los "ingenieros" pueden incluso, por mal cálculo, llegar al horrible espectáculo del monopolio político como en el 91); b) dedicar recursos masivos para levantar un censo político de alta precisión con fines que van más allá de lo electoral inmediato focalizando a los destinatarios de la "seguridad" política y la inversión pública, en particular a PRONASOL, y c) provocar el desaliento y el abstencionismo cuando los ciudadanos constatan que las opciones por el cambio y el voto opositor están negados o se reducen sólo a la oposición "leal" del PAN que aparece por momentos como partido de Estado junto al PRI, el PRONASOL, el clero, los partidos títere, Televisa-TLC, etc.)

3) *El desmantelamiento de la universidad pública* y en particular de las ciencias sociales, al abatirse los ingresos de la academia, enviando a los grandes maestros a la búsqueda de empleos suplementarios, prestigiando deliberadamente a los centros privados cuya planta académica ha sido casi en su totalidad formada en planteles y con subsidios públicos, separando institutos de escuelas y facultades, otorgando estímulos económicos y becas con base en la fidelidad institucional, enfrentando a todos contra todos, hasta a los más prestigiados maestros, por un ínfimo trozo de estímulos monetarios, supeditando al cuerpo académico a las disposiciones hacendarias y de seguridad política ya que el presupuesto de las univer-

sidades, en otra hora autónomas, se desglosa hoy minuciosamente desde la Secretaría de Hacienda. No existe así ninguna forma de destinar fondos para relacionar horizontalmente (utopía de los setentas) sapiencia universitaria con necesidades populares o de grupos medios (el único horizontalismo que se permite a este respecto es entre los institutos de alta tecnología y la gran empresa). Junto a ello, los académicos brillantes, depauperados, son absorbidos por la aspiradora hacia arriba, se les facilita su ingreso en los aparatos públicos, en la administración de los órganos oficiales de cultura, en los aparatos masivos de difusión, en la alta y bien controlada jerarquía de las academias, en las cámaras, en los partidos, lo que sea con tal de sacarlos a toda costa de sus cubículos y de las aulas (en la última revisión de "estímulos académicos" en la UNAM fueron mejor calificados quienes demostraron tener un segundo empleo, en muchos casos de tiempo completo). Sólo se refugian en la educación superior los que no reciben ninguna otra oferta (y algunos locos). Ya colocada ahí la universidad pública pasa a ser criticada por su ineficacia. ¿Quién puede en estas condiciones crear una asociación para la defensa de los intereses de su gremio si no ha quedado ningún lugar intermedio, ni presupuestariamente ni identitariamente...?

4) *El control de los medios de comunicación* de masas cuya propiedad puede privatizarse pero el contenido de sus emisiones permanece bajo estricto control a través de la contratación de publicidad gubernamental, la intromisión en la elección de directivos, la política impositiva o el veto deliberado sobre periodistas, conductores de programas radiofónicos y televisivos, etc. Para quien se muestra dispuesto a prestigiar las políticas gubernamentales o descalificar a los críticos, van ayudas directas en monetario, programas de televisión exclusivos, propaganda de todas las instituciones federales y estatales, contratos millonarios para la producción de "obras" culturales. En el largo plazo quizá sólo han podido escapar *Vuelta* en las letras y *Proceso* en la política...

5) Finalmente el PRONASOL resulta lo más nítido para ejemplificar este vaciamiento de las intermediaciones al ligar en forma directa a la figura personalizada del presidente de la República con la diminuta y *transitoria* (sólo mientras dura la obra) asociación de ciudadanos paupérrimos allá, en lo más recóndito de la sociedad atomizada, o bien, cuando así conviene, al prestigiar a tal organización,

por la que se canalizan los fondos, en detrimento de tal otra, indeseable, regularmente de más larga data, mejor asentada y con más autonomía con respecto a la estructura de control gubernamental; o bien, se le entrega un tractor a un miembro no tan justificado de un grupo que había solicitado cinco, lo que muy probablemente provocará la confrontación de ese agregado de campesinos. Es cierto que el PRONASOL elimina intermediarios corruptos que en otros momentos impedían que los dineros públicos llegaran a quienes estaban supuestamente dirigidos, pero lo que se ha confundido deliberadamente en este programa es que con el pretexto de eliminar intermediarios se están desmantelando las más auténticas organizaciones intermedias de la sociedad, de la misma manera que el neoliberalismo, al criticar el corporativismo corrupto de algunas cúpulas en sindicatos y cooperativas, concluye que lo que hay que erradicar es la totalidad de los sindicatos, cooperativas y asociaciones. Esto forma parte de una misma concepción desmanteladora de las defensas sociales, de la consistencia del tejido social, y cuando a las altas autoridades responsables de la Secretaría de Gobernación se les pregunta si tal desmantelamiento de lo social no coloca las bases del orden y del Estado en una especie de fango inconsistente (“lo que resiste apoya”, decía sabiamente Reyes Heróles), responden de manera asombrosa que el tejido corporativo anterior está siendo sustituido por uno más moderno, menos aparatoso con base en organizaciones no gubernamentales y otras células microscópicas de la pedacería social.

VI

No son los movimientos y luchas sociales, no son los órdenes comunitarios o asociativos y tampoco parece ser el sistema político en sus manifestaciones partidistas, parlamentarias, frentistas o sindicales, las esferas de expresión socio-política privilegiadas en este panorama desordenado: ellos son más bien los grandes perdedores. ¿No será la vía autoritaria o, digamos, este renacimiento de la relación líder-masas la única forma de integración ante una sociedad en desmantelamiento por el cambio acelerado? Y es que, en efecto, ¿desde dónde, si no desde un Estado movilizador, sería posible

articular manifestaciones que por momentos aparecen como atomización o individuación anómica, que amenazan también con explosiones espontáneas y radicales de violencia, que se refugian, cuando aún les es posible, en la comunidad y las identidades restringidas o que tienden en ocasiones a ser atraídas por el individualismo consumista, anti-autoritario y anti-nacional? ¿Será que el regreso sorprendente del monstruo paternalista-autoritario comienza a rebelarse como una solución de continuidad, cohesión nacional y reconstrucción de las identidades mucho más viable que la permanencia en el abandono en que el Estado neoliberal ha sumido a la pedacería social en la obsesión por achicarse, para la inflación, reconvertir la industria, pagar la deuda y hacernos competitivos en mercados excluyentes? Qué horror haber dicho esto hace 20 años aunque hoy no suene tan desautorizado por los acontecimientos. ¿Comenzamos yendo contra el Estado y terminamos buscando ayuda?

Quién puede dudar de que hubiera sido mucho mejor un tipo de sociedad fuerte en sus organizaciones intermedias, que facilitara el engrandecimiento de la personalidad de cada individuo, la interacción en el más alto nivel de racionalidad como lo quiere Habermas, o el interés colectivo de la Polis evocado por Castoriadis, que hiciera corresponder a agregados socio-económicos con organizaciones o partidos políticos y con ideologías o proyectos de sociedad futura; que cultivara, en resumen, unas instituciones estables tanto sociales como en el plano de las representaciones políticas. Pero lo que ha sucedido es que no nos estamos acercando ni a una democracia asentada en la sociedad civil como lo quisiera *Vuelta* o el PAN (aunque fuera como resultado de la lucha conflictual de las clases), ni a una con predominancia de la sociedad política (partidos parlamentos o grandes fuerzas corporativas), sino que la predominancia parece favorecer, en el mejor de los casos, a la lógica masivo-popular o popular-estatal. Mientras tanto uno de cada diez mexicanos juega al ciudadano, al consumo, al elector y Televisa hace creer al resto que para allá vamos todos con el TLC.

Si lo hasta aquí presentado fuera aceptable podríamos concluir diciendo que mientras la juventud del 68 fue hija de una sociedad en fortalecimiento, la juventud de la década perdida y del último decenio del siglo es hija de una sociedad en debilitamiento: hija del desorden, la polarización socioeconómica y la desidentidad.